

Se supo el 2 de marzo que los integrantes de la Coordinadora de Vecinos del fraccionamiento "Los Naranjos" pagarían hasta 320 mil nuevos pesos a su asesor legal Ernesto Landeros, por gastos de representación y por lograr la firma del convenio con el Gobierno del Estado y la Constructora Garza-Ponce. De acuerdo con los contratos firmados por los 320 integrantes del organismo estos tendrían que entregar al abogado el 3% del total obtenido por el traspaso, venta o permuta de sus propiedades.

Las lluvias de los primeros días de marzo impidieron continuar con el retiro de los residuos industriales sepultados en "Los Naranjos".

Las labores para desalojar los desechos tóxicos fueron reanudadas el día cinco, después de ser suspendidas durante dos días por el mal tiempo que imperaba en la ciudad. Se procuró trabajar durante los fines de semana y usar más camiones en el retiro de los desechos industriales.

Aunque el Gobierno del Estado aseguró que aceleraría el retiro de los desechos de "Los Naranjos", sólo proporcionó 2 camiones de volteo, mientras que la Constructora Garza-Ponce y el municipio de San Nicolás participaron con maquinaria pesada y más vehículos. Los trabajos se realizaban con lentitud, por falta del apoyo estatal, dijo el alcalde nicolaíta.

La falta de presupuesto estatal para contratar vehículos de mayor capacidad para el retiro de desechos en "Los Naranjos" extendería las obras de 3 a 11 semanas, admitió Ernesto Tinajero y Morán, coordinador de la rehabilitación.

Por falta de recursos para pagar el confinamiento de los residuos de "Los Naranjos", el Gobierno del Estado solicitaría el apoyo de instituciones como la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León dijo Héctor Morales, vocero de SEDUOP.

Para acelerar los trabajos de rehabilitación, las cámaras de la Industria de la Construcción y del Autotransporte aportaron cada una 2 camiones de 30 metros cúbicos de capacidad, dijo el propio Héctor Morales Rivera.

El área con la que iniciaron el retiro de los desechos tóxicos de "Los Naranjos", terminó de ser excavada y ya se localizó el segundo punto a ser limpiado en los siguientes días, dijo Héctor Morales. Hasta el momento se llevaba un avance del 35%, con un total de 1,800 metros cúbicos excavados.

Hasta el día 15 de marzo no existían datos precisos sobre los responsables del tiradero en Los Naranjos y faltaba información clara sobre las empresas que utilizaron el sector como confinamiento, decía José Luis Tamez, delegado en Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El día 17 de marzo de 1995, varias toneladas de basura doméstica mezclada con polvos de fundición fueron analizadas para enviarlas a confinar al relleno sanitario de SIMEPRODE y así ahorrar recursos en la remediación del fraccionamiento. Hasta el momento se habían retirado 2,600 metros cúbicos de desechos.

El 19 de marzo, Jesús López Parga, supervisor de los trabajos de retiro, comunicó

Por falta de recursos para pagar el confinamiento de los residuos de "Los Naranjos", el Gobierno del Estado solicitó el apoyo de instituciones como la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León dijo Héctor Morales, vocero de SEDUOP.

Para seleccionar los trabajos de rehabilitación, las cámaras de la Industria de la Construcción y del Autotransporte aportaron cada una 2 camiones de 30 metros cúbicos de capacidad, dijo el propio Héctor Morales Rivera.

El área con la que iniciaron el retiro de los desechos tóxicos de "Los Naranjos", terminó de ser excavada y ya se localizó el segundo punto a ser limpiado en los siguientes días, dijo Héctor Morales. Hasta el momento se llevaba un avance del 35%, con un total de 1,800 metros cúbicos excavados.

Hasta el día 15 de marzo no existían datos precisos sobre los responsables del tiradero en Los Naranjos y faltaba información clara sobre las empresas que utilizaron el sector como confinamiento, decía José Luis Tamez, delegado en Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El día 17 de marzo de 1995, varias toneladas de basura doméstica mezclada con polvos de fundición fueron analizadas para enviarlas a confinamiento sanitario de SIMERODE y así ahorrar recursos en la remediación del fraccionamiento. Hasta el momento se habían retirado 2,600 metros cúbicos de desechos.

El 19 de marzo, Jesús López Parra, supervisor de los trabajos de retiro, comunicó

Se supo el 2 de marzo que los integrantes de la Coordinadora de Vecinos del fraccionamiento "Los Naranjos" pagaban hasta 320 mil nuevos pesos a su sector legal Ernesto Landeros, por gastos de representación y por lograr la firma del convenio con el Gobierno del Estado y la Constructora Garza-Ponce. De acuerdo con los contratos firmados por los 320 integrantes del organismo estos tendrían que entregar al 30% del total obtenido por el traspaso, venta o permuta de sus propiedades.

Las lluvias de los primeros días de marzo impidieron continuar con el retiro de los residuos industriales sepultados en "Los Naranjos".

Las labores para desalcantar los desechos tóxicos fueron resuspendidas el día cinco, después de ser suspendidas durante dos días por el mal tiempo que imperaba en la ciudad. Se procuró trabajar durante los fines de semana y usar más camiones en el retiro de los desechos industriales.

Aunque el Gobierno del Estado aseguró que aceleraría el retiro de los desechos de "Los Naranjos", sólo proporcionó 2 camiones de volteo, mientras que la Constructora Garza-Ponce y el municipio de San Nicolás participaron con maquinaria pesada y más vehículos. Los trabajos se realizaban con lentitud, por falta del apoyo estatal, dijo el alcalde nicolaista.

La falta de presupuesto estatal para contratar vehículos de mayor capacidad para el retiro de desechos en "Los Naranjos" extendió las obras de 3 a 11 semanas, admitió Ernesto Tinajero y Morán, coordinador de la rehabilitación.

que para iniciar con los trabajos de relleno en el terreno contaminado de "Los Naranjos", era necesario esperar el resultado de los estudios hechos a un conjunto de rocas que no habían sido detectadas en el subsuelo.

Al siguiente día, continuaron las negociaciones con las autoridades del Gobierno del Estado para establecer la situación de las viviendas. Los ofrecimientos son de traspasos, permutas, o reparación de las viviendas en las que quieran continuar los habitantes. La Constructora Garza-Ponce no quería dialogar con ellos.

Los vecinos de "Los Naranjos" denunciaron a su dirigente Rosa María Flores Avila y a su representante legal, Ernesto Villarreal, de beneficiarse económicamente con un "apoyo social" de 600 mil nuevos pesos otorgado por el Gobierno del Estado a los vecinos del fraccionamiento. De acuerdo a lo dicho por una vecina, 200 mil nuevos pesos de los 600 mil, fueron entregados como pago a Villarreal Landeros, por decisión de Flores Avila, quien les informó que el resto sería repartido entre los demandantes.

El 23 de marzo hubo empujones, gritos y enfrentamientos verbales entre los vecinos de "Los Naranjos", porque los que se encontraban inconformes con el manejo del contrato efectuado con la constructora no permitieron la entrada a los demás vecinos, a una junta organizada por la coordinadora. La Subsecretaría de Ecología era sanear completamente el sitio.

El representante legal del fraccionamiento "Los Naranjos" admitió que la Coordinadora de Vecinos recibió 600 mil nuevos pesos como apoyo social en el convenio hecho con la constructora y el Gobierno del Estado. Ernesto Villarreal Landeros agregó que, de los 600 mil nuevos pesos, los colonos determinaron pagarle a él

200 mil como parte de sus honorarios, por lo que restaba que cada vecino le pagase el 5% de lo que obtuviera por la transacción de su vivienda. En los próximos días se decidiría cual sería el criterio para distribuir los 400 mil nuevos pesos restantes entre los colonos.

Mientras que el Gobierno negó haber pagado a los vecinos de "Los Naranjos", y la representante de la Coordinadora afirmó que ignora quien le giró los 600 mil nuevos pesos, cierta papelería obtenida por el periódico "EL Norte" demuestra que Rosa María Flores firmó un recibo al Estado y recibió el cheque de la Tesorería General. Gustavo Alarcón, Secretario General de Gobierno, aseguró que la Constructora Garza-Ponce fue la que pagó 600 mil nuevos pesos a la Coordinadora de Vecinos del fraccionamiento, y que el Gobierno sólo actuó como conciliador en el conflicto. La Coordinadora de Vecinos ya habían recibido ayuda social, mientras que la mayoría de quienes denunciaron no.

El día 28, Gustavo Alarcón Martínez dijo que el Gobierno del Estado intervino en la entrega de la ayuda social que la constructora destinó a los habitantes afectados de "Los Naranjos", para darle transparencia al contrato. El retiro de los desechos tóxicos, por la exigencia de los vecinos.

El día 4 de abril, los responsables de la extracción de los desechos confinados ilegalmente frente al fraccionamiento "Los Naranjos" estudiaron cómo "sellar" una porción que está petrificada para dejarla en el sitio, dijo Héctor Morales Rivera. Asimismo, se dijo que no se había avanzado nada en cuanto a RIMSA. Se seguía estudiando el problema y se continuaba en pláticas entre los directivos de la empresa y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. de la SEDUOP, que el confinamiento de los residuos en el tiradero de Min.

Ramiro Garza Villarreal, titular de la

300 mil como parte de sus honorarios por lo que restaba que cada vecino le pagase el 25% de lo que obtuviera por la transacción de su vivienda. En los próximos días se decidiría cual sería el criterio para distribuir los 400 mil nuevos pesos restantes entre los colonos.

Mientras que el Gobierno negó haber pagado a los vecinos de "Los Naranjos", la representante de la Coordinadora afirmó que ignora quien le giró los 600 mil nuevos pesos. Esta papelería obtenida por el periódico "El Norte" demuestra que Rosa María Flores firmó un recibo al Estado y recibió el cheque de la Secretaría General Gustavo Alarcón, Secretario General de Gobierno, aseguró que la Constructora Garza-Ponce fue la que pagó 600 mil nuevos pesos a la Coordinadora de Vecinos del fraccionamiento, y que el Gobierno sólo actuó como conciliador en el conflicto.

El día 28, Gustavo Alarcón Martínez dijo que el Gobierno del Estado intervino en la entrega de la ayuda social que la constructora destinó a los habitantes afectados de "Los Naranjos", para darle transparencia al contrato.

El día 4 de abril, los responsables de la extracción de los desechos confinados legalmente frente al fraccionamiento "Los Naranjos" estudiaron cómo "sellar" una porción que está petrificada para dejarla en el sitio, dijo Héctor Morales Rivas. Asimismo, se dijo que no se había avanzado nada en cuanto a RIMSA. Se seguía estudiando el problema y se continuaba en pláticas entre los directivos de la empresa y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Ramiro Garza Villarreal, titular de la

que para iniciar con los trabajos de relleno en el terreno contaminado de "Los Naranjos", era necesario esperar el resultado de los estudios hechos a un conjunto de rocas que no habían sido detectadas en el subsuelo.

Al siguiente día continuaron las negociaciones con las autoridades del Gobierno del Estado para establecer la situación de las viviendas. Los ofrecimientos son de traspaños, permutas, o reparación de las viviendas en las que quisieran continuar los habitantes.

Los vecinos de "Los Naranjos" denunciaron a su dirigente Rosa María Flores Avila y a su representante legal, Ernesto Villarreal, de beneficiarse económicamente con un "apoyo social" de 600 mil nuevos pesos otorgado por el Gobierno del Estado a los vecinos del fraccionamiento. De acuerdo a lo dicho por una vecina, 200 mil nuevos pesos de los 600 mil fueron entregados como pago a Villarreal Landeros, por decisión de Flores Avila, quien les informó que el resto sería repartido entre los demandantes.

El 23 de marzo hubo empujones, gritos y enfrentamientos verbales entre los vecinos de "Los Naranjos", porque los que se encontraban inconformes con el manejo del contrato efectuado con la constructora no permitieron la entrada a los demás vecinos, a una junta organizada por la coordinadora.

El representante legal del fraccionamiento "Los Naranjos" admitió que la Coordinadora de Vecinos recibió 600 mil nuevos pesos como apoyo social en el convenio hecho con la constructora y el Gobierno del Estado. Ernesto Villarreal Landeros agregó que, de los 600 mil nuevos pesos, los colonos determinaron pagarle a él

SEDUOP, informó el día 12 que si no había contratiempos por el clima o bloqueos, el retiro de los desechos podría terminar en tres días hábiles y añadió que, luego de definir con la empresa RIMSA la facturación por la recepción de los desechos, el Estado podría empezar a pagar en 30 días.

Los habitantes de Los Naranjos, que pertenecieron a la Coordinadora de Vecinos, bloquearon los trabajos de extracción de desechos industriales, en protesta porque dijeron que la Constructora Garza-Ponce no quería dialogar con ellos.

Conforme al proyecto de extracción de los residuos industriales bajo el fraccionamiento "Los Naranjos", la fosa de donde salió el material, fué rellenada con tierra, dijo Ramiro Garza Villarreal, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el día 14 de abril.

El día 28 de mayo de 1995, el Gobierno del Estado y la Constructora "Los Naranjos" estaban inconformes porque el Gobierno del Estado y la Constructora "Los Laureles" no tenían intención de retirar los residuos bajo la calle Tlachicuerías, dijo el alcalde nicolaíta. Adalberto Núñez comentó que el acuerdo entre las autoridades, los vecinos y la empresa constructora, era limpiar el predio frente a la calle Tlachicuerías y debajo de ella, hasta el cordón de la banquetta; sin embargo, el compromiso de la Subsecretaría de Ecología era sanear completamente el predio frente a "Los Naranjos", dijo Julián de la Garza Castro, director de Control Ambiental. En caso de ser necesario, aseguró el funcionario estatal, abrirían la calle Tlachicuerías, como lo deseaban los vecinos, aunque los estudios realizados por la UANL señalaban que los desechos no llegaban hasta ese lugar.

El material tóxico de "Los Naranjos" terminaría de ser extraído el 23 de abril, según informes de un supervisor de los trabajos que se realizaban en el área. Sólo faltaba una pequeña cantidad de rocas grises para dar por concluido el problema de contaminación. Dicho material no era muy fácil de sacar y se trató de romperlo para retirarlo fácilmente.

Pese a que el retiro de material tóxico del terreno sería finalizado ese día, los trabajos fueron suspendidos por los vecinos de la calle Tlachicuerías, por supuestos olores a amoníaco. Los habitantes de la calle amenazaron con bloquear los trabajos, hasta que la constructora se comprometiera a indemnizarlos. Expresaron que los habitantes del fraccionamiento que viven a tres y cuatro cuadras del área impactada y pertenecían a la Coordinadora de Vecinos ya habían recibido ayuda social, mientras que la mayoría de quienes viven en Tlachicuerías, por no pertenecer a ese organismo, no habían recibido ningún apoyo.

El día 10 de mayo cumplió una semana de suspendido el retiro de los desechos tóxicos, por la exigencia de los vecinos de lograr una negociación con la Constructora Garza-Ponce. Los vecinos de la calle frente al terreno impactado exigieron una indemnización a la constructora, por mediación del Gobierno del Estado, porque las medidas de sus propiedades no corresponden a las de los planos originales y por presuntos daños a la salud ocasionados por los desechos.

El 2 de mayo anunció Ramiro Garza Villarreal, de la SEDUOP, que el confinamiento de los residuos en el tiradero de Mina costaría alrededor de 700 mil nuevos

pesos. Quizá con sanciones aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la posible ayuda de los industriales nuevoleonenses, se podría cubrir ese gasto.

A casi dos semanas de que las labores de extracción de los desechos tóxicos se encontraban abandonadas, la excavación realizada se inundó por las pasadas lluvias. Una vez que se llegase a una negociación o que la Subsecretaría de Gobierno llegara a un arreglo con los vecinos, se necesitarían tres días de labores para terminar la extracción del material.

Los trabajos de excavación y la construcción del parque ecológico estarían detenidos hasta que los vecinos de la calle Tlachicuerías retirasen el bloqueo que habían hecho en el área, dijo Héctor Morales Rivera.

El día 28 de mayo de 1995, el Gobierno del Estado, el municipio de San Nicolás y la Constructora Garza-Ponce iniciaron el retiro del agua acumulada por las lluvias en el pozo creado por la extracción de desechos industriales. Los vecinos que bloquearon los trabajos de extracción, no pertenecían a la Coordinadora de Vecinos del fraccionamiento "Los Naranjos", dijo el funcionario Héctor Morales Rivera.

El 7 de junio, ante la negativa de la Constructora Garza Ponce de llegar a una negociación, 21 familias de la calle Tlachicuerías, de "Los Naranjos", procederían legalmente en su contra. Demandarían a la constructora porque presuntamente las medidas de sus propiedades no corresponden a las de los planos originales entregados por la inmobiliaria y por presuntos daños causados por los desechos tóxicos enterrados

frente al fraccionamiento. En tanto, Rosa María Flores Avila, representante de la Coordinadora de Vecinos del fraccionamiento dijo que la suspensión de las obras por otro grupo de habitantes, solicitarían a las autoridades acelerar el convenio de negociación que ellos firmaron, por lo que ya entregaron a los Bancos las listas de los propietarios que deseaban traspasar sus casas.

El 16 de junio terminaron el retiro de los desechos en "Los Naranjos", habiendo alcanzado un volumen total de material de 15 mil 300 metros cúbicos, cuando el estimado era alrededor de 8 mil 500. La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente buscó a las empresas responsables para que colaboraran en sufragar los gastos. Asimismo, se iniciaría el relleno y la construcción del parque ecológico, éste con un costo de 350 mil nuevos pesos.

De no encontrar el apoyo esperado por parte de la Constructora Los Laureles del Gobierno del Estado, los habitantes de la calle Tlachicuerías iniciarían protestas y marchas, dijo Mario García López, vecino de este sector.

Américo Montemayor Garza, director de Relaciones Industriales de la empresa "Residuos Industriales Multiquim", dijo que por el confinamiento de los residuos retirados frente a "Los Naranjos", el Gobierno del Estado adeudaba un millón 800 mil nuevos pesos a la empresa.

El día 22 de junio, el gobierno estaba "esperanzado" en identificar a las empresas responsables del tiradero para cobrarles el adeudo de 1 millón 800 mil nuevos pesos, dijo Julián de la Garza Castro. En el caso de no encontrar a los responsables, el Gobierno

El material tóxico de "Los Naranjos" terminaría de ser extraído el 23 de abril, según informes de un supervisor de los trabajos que se realizaban en el área. Sólo faltaba una pequeña cantidad de toneladas para dar por concluido el problema de contaminación. Dicho material no era muy fácil de sacar y se trató de romperlo para retirarlo fácilmente.

Pese a que el retiro de material tóxico del terreno sería finalizado ese día, los trabajos fueron suspendidos por los vecinos de la calle Tlachicuerías por supuestos olores a amoníaco. Los habitantes de la calle amenazaron con bloquear los trabajos, hasta que la constructora se comprometiera a indemnizarlos. Esperaban que los habitantes del fraccionamiento que viven a tres y cuatro cuadras del área impactada pertenecieran a la Coordinadora de Vecinos ya habían recibido ayuda social, mientras que la mayoría de quienes viven en Tlachicuerías por no pertenecer a ese organismo, no habían recibido ningún apoyo.

El día 10 de mayo cumplió una semana de suspensión el retiro de los desechos tóxicos, por la exigencia de los vecinos de lograr una negociación con la Constructora Garza-Ponce. Los vecinos de la calle frente al terreno impactado exigieron una indemnización a la constructora, por mediación del Gobierno del Estado, porque las medidas de sus propiedades no corresponden a las de los planos originales y por presuntos daños a la salud ocasionados por los desechos.

El 2 de mayo anunció Ramiro Garza Villarreal, de la SEDUOP, que el confinamiento de los residuos en el tiradero de Mina costaría alrededor de 700 mil nuevos

SEDUOP, informó el día 15 que si no había contrastes por el clima o bloqueos, el retiro de los desechos podría terminar en tres días hábiles y añadió que, luego de definir con la empresa RIMSA la facturación por la recepción de los desechos, el Estado podría comenzar a pagar en 30 días.

Los habitantes de Los Naranjos, que pertenecen a la Coordinadora de Vecinos, bloquearon los trabajos de extracción de desechos industriales, en protesta porque dijeron que la Constructora Garza-Ponce no quería dialogar con ellos.

Conforme al proyecto de extracción de los residuos industriales bajo el fraccionamiento "Los Naranjos", la zona de donde salió el material, fue rellenada con tierra, dijo Ramiro Garza Villarreal, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el día 14 de abril.

Cerca de 30 familias de "Los Naranjos" estaban inconformes porque el Gobierno del Estado y la Constructora "Los Laureles" no tenían intención de retirar los residuos bajo la calle Tlachicuerías, dijo el alcalde nicoleño. Adalberto Núñez comentó que el acuerdo entre las autoridades, los vecinos y la empresa constructora, era limpiar el predio frente a la calle Tlachicuerías y debajo de ella, hasta el cordón de la pandura; sin embargo, el compromiso de la Subsecretaría de Ecología era sanear completamente el predio frente a "Los Naranjos", dijo Julián de la Garza Castro, director de Control Ambiental. En caso de ser necesario, aseguró el funcionario estatal, abrirán la calle Tlachicuerías, como lo deseaban los vecinos, aunque los estudios realizados por la UANL señalaban que los desechos no llegaban hasta ese lugar.